

Derechos humanos en Argentina

Informe 2013

Centro de Estudios Legales y Sociales



Índice

Agradecimientos	19
Prólogo	21
Presentación. Tres décadas de democracia	23
La alianza cívico-militar-eclesiástica	23
Un nuevo actor social	25
De las democracias viables a la megacrisis	26
El rol de la justicia	29
El factor externo	30
La nulidad	32
El punto de inflexión	33
Rehacer la Corte	36
Redes de ilegalidad	38
Demagogia punitiva o seguridad democrática	40
Expansión de derechos	41
AMIA, justicia militar y libertad de expresión	43
Conflicto y control social	45
Siempre más	48
I. América Latina en la búsqueda de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad.	51
Una mirada en clave regional	51
1. Presentación	51
2. Poner en contexto: un mapeo de los procesos de justicia transicional en América Latina	53
3. Avances, retrocesos y obstáculos en la rendición de cuentas en América Latina	55
3.1. El proceso argentino	55
3.1.1. Síntesis de las medidas implementadas en busca de memoria, verdad y justicia	55
3.1.2. Diagnóstico del avance del proceso de justicia	60

a. Confirmación de sentencias, ¿política de Estado?	70	3.5.2. El estado de los procesos penales por crímenes contra los derechos humanos	120
b. El desafío para 2013: lo que aún queda por juzgar	78	a. Distribución de los casos según el lugar de la comisión de los hechos	122
3.1.3. Los hitos de 2012	79	b. Distribución de los casos según la fecha de la ocurrencia de los hechos	123
a. Hechos anteriores a marzo de 1976 como crímenes de lesa humanidad. La “Masacre de Trelew”	79	c. Distribución de casos según la etapa procesal	123
b. El año de los megajuicios	81	d. Sentencias referidas a graves violaciones a los derechos humanos	125
c. Imputaciones a civiles como parte de los desafíos del nuevo proceso de justicia.	85	3.5.3. Sentencias de la Corte Suprema	127
d. Avances en la investigación de crímenes de violencia de género	89	4. Conclusiones comparadas	128
3.2. Chile: dos décadas de justicia de transición	91	II. El sistema de seguridad como ámbito de reproducción de violencias y desigualdad. Desencuentro entre las políticas y los problemas que afectan derechos humanos	133
3.2.1. Dictadura y transición: 1973-1990	91	PARTE I. Persistencia de prácticas de violencia institucional y su concentración sobre sectores vulnerables	135
3.2.2. Hitos y políticas públicas en verdad, justicia y reparaciones	92	1. Los números de la violencia institucional	135
3.2.3. 1998 y la “irrupción” de la justicia	95	1.1. Homicidio de Lautaro Bugatto por un agente de la Policía de la provincia de Buenos Aires	137
3.2.4. Diagnóstico del avance del proceso de justicia en Chile: hitos recientes	97	2. Poblaciones subprotegidas y sobrevigiladas: los barrios pobres como ámbito diferenciado de actuación policial	139
3.2.5. Causas	98	2.1. Prácticas abusivas en barrios pobres	142
3.2.6. Sentencias y penas	99	2.1.1. Rutinas de actuación policial en el Barrio Mitre de la ciudad de Buenos Aires	142
3.2.7. Agentes	100	a. Homicidio policial en el marco de un allanamiento en el Barrio Mitre: el asesinato de Alan Tapia	144
3.3. Uruguay en la búsqueda de justicia	100	2.1.2. Control territorial y formas de abuso contra jóvenes de barrios pobres	146
3.3.1. El conflicto y la transición negociada	100	a. Prácticas abusivas de Gendarmería y Prefectura en acciones de seguridad barrial	146
3.3.2. Comisión para la Paz e informe <i>Nunca más</i>	101	b. Prácticas cotidianas de abuso y hostigamiento a jóvenes en barrios pobres por parte de la Policía Bonaerense	151
3.3.3. La Ley de Caducidad	102	2.2. Connivencia con redes delictivas: la Policía como un engranaje fundamental de la violencia en Florencio Varela	157
3.3.4. Breve reactivación de las causas y desafíos luego de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 18 831	104	2.2.1. La participación de la Policía en la violencia en el marco de tomas de tierras	158
3.4. Derechos humanos y legado de la dictadura en Brasil	109		
3.4.1. El contexto de la democratización: la transición “lenta, segura y gradual”	109		
3.4.2. El desarrollo de medidas de justicia transicional en Brasil	110		
3.4.3. Los desafíos pendientes: romper con el modelo de responsabilización abstracta	113		
3.5. Logros y retrocesos en el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en Perú	118		
3.5.1. El conflicto armado interno en Perú y la transición	118		

2.2.2. Connivencia entre policías y narcotraficantes en el control del territorio en Florencio Varela	164	5.3. La respuesta de la justicia frente a casos emblemáticos de represión	230
a. El asesinato de Carlos “el Pelado” Fretes	164	5.3.1. Inadecuada respuesta de la justicia y nuevos hechos de violencia por el reclamo de tierras de la comunidad indígena Qom Potae Napocna Navogoh-La Primavera	231
b. Militantes sociales como blanco de bandas criminales en Pico de Oro	166	5.3.2. Impunidad a once años del 19 y 20 de diciembre de 2001	234
2.3. Operativos de intervención territorial en seguridad del gobierno nacional	168	5.3.3. Marchas y contramarchas en la investigación por muertes en el Parque Indoamericano	235
2.3.1. La experiencia del Cuerpo Policial de Prevención Barrial (CPPB) en el Plan de Abordaje Integral (AHÍ)	171	5.3.4. Represión en Ledesma, Jujuy: más de un año de impunidad	236
2.3.2. Hacia la elaboración de criterios propios de evaluación de intervenciones territoriales	174	5.3.5. A dos años de la represión en el barrio La Cárcova, de José León Suárez	236
3. Detenciones y otras prácticas policiales abusivas en virtud de la vulnerabilidad de diferentes grupos de población	177	PARTE II. Gobiernos de la seguridad: la reforma del sistema de seguridad permanece como una deuda histórica	237
3.1. Acciones de extorsión policial a personas que estuvieron detenidas en cárceles y/o comisarías	184	6. Provincia de Buenos Aires: fisuras y continuidad del modelo delegativo de la seguridad	240
3.2. Acciones de persecución policial basadas en la Ley 23 737	188	6.1. Ministerio de Seguridad de la nación: ejercicio del gobierno político en ausencia de reformas integrales del sistema de seguridad	249
3.2.1. Intentos de reforma de la Ley 23 737 a partir del fallo “Arriola”	192	6.1.1. Cambios en el diseño institucional y en la integración del Ministerio	250
3.3. Hostigamiento y extorsión a travestis, transexuales y mujeres que ejercen la prostitución	194	6.1.2. La ausencia de un programa integrado de gestión del control policial	254
3.4. Acciones de persecución policial contra vendedores e inmigrantes	200	6.1.3. Dos ejes de políticas claves desde una perspectiva de derechos humanos	259
4. Casos de desaparición como forma extrema de violencia y encubrimiento policial	205	a. Políticas orientadas a la reducción de la violencia	259
4.1. Desaparición de Daniel Solano en Choele Choel, Río Negro	208	b. Profundización de las reformas en la formación de funcionarios de seguridad	260
4.2. Regularidades entre los casos de desaparición	211	6.1.4. Recuperación del gobierno político tras “la crisis de Gendarmería”	263
5. Dimensiones de la respuesta estatal a las protestas y otros conflictos sociales: hechos de represión, criminalización e impunidad	216	6.2. Impulso y reformas de políticas provinciales de seguridad	265
5.1. Hechos de represión de protestas y otros conflictos sociales	218	6.2.1. Avance en la reforma de leyes provinciales de seguridad	267
5.2. Criminalización y judicialización de referentes sociales	223	6.2.2. Promoción de la modificación de los códigos de faltas	269
5.2.1. La investigación sobre actividades de inteligencia sobre referentes sociales, políticos y sindicales	223		
5.2.2. Querrelas y acciones criminalizantes de gobiernos contra manifestantes	228		

7. Conclusión: la reforma del sistema de seguridad es una condición necesaria para afectar las prácticas policiales más problemáticas en materia de derechos humanos	271	5.3. La situación de los testigos y de las víctimas de hechos de violencia en el encierro	328
III. Sobre las vidas precarias. Tortura, abandono y muerte en las cárceles argentinas	277	6. Los órganos de control y monitoreo para prevenir y sancionar graves violaciones a los derechos humanos: el mecanismo nacional de prevención de la tortura y las defensas públicas	332
1. Introducción	277	7. Palabras finales	338
2. Muertes, violencia y abandono en el encierro	281	IV. Vivienda adecuada y déficit habitacional. Intervenciones complejas y necesarias	341
2.1. La evolución de las muertes en prisión	282	1. El déficit habitacional y la situación de la vivienda en la Argentina a partir de la lectura del Censo Nacional de Población de 2010	344
2.2. La situación en el Servicio Penitenciario Federal (SPF): el aumento de indicadores preocupantes	285	1.1. El déficit habitacional	345
2.3. El Servicio Penitenciario Bonaerense: amenaza actual e inminente al derecho a la vida y la integridad personal	291	1.1.1. Los datos del hacinamiento familiar y de los hogares	345
2.4. Graves deficiencias en los registros de la información	298	1.1.2. Los datos sobre la calidad de la vivienda	346
2.5. Estándar de muertes en custodia. La responsabilidad estatal	299	1.1.3. Los datos del hacinamiento familiar o por hogar en función del tipo de vivienda	346
2.6. El impacto de la muerte de las personas detenidas en las familias	301	1.2. Los datos sobre el régimen de tenencia de vivienda	348
3. El SPB por dentro: prácticas de violencia, corrupción, abandono y muerte	303	1.3. La interpretación de los datos censales sobre la problemática habitacional	352
3.1. Entrega del manejo de los bienes y servicios	304	2. Las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional. La definición y puesta en marcha del Pro.Cre.Ar. y las modificaciones al Plan Federal de Vivienda	354
3.2. Circulación de “facas” y elementos prohibidos bajo la mirada del SPB	306	3. Desafíos que representa en materia de vivienda la unificación de los códigos Civil y Comercial de la nación	363
3.3. Traslados: viejas prácticas y nueva dinámica	308	4. Una saludable novedad. La aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires	371
3.4. Decisiones conflictivas sobre el alojamiento de los detenidos	312	5. Discusiones sobre el derecho a la vivienda y las respuestas de la Corte Suprema: contenido del derecho y pautas de interpretación	373
3.5. Delegación del “trabajo violento”. Agentes penitenciarios como reguladores de determinados hechos de violencia	313	6. El reconocimiento del derecho a la vivienda en los procesos de relocalización en el marco del caso “Riachuelo”	379
3.6. Violencia física directa y falsificación de las pruebas	314	7. El derecho a la vivienda exige que las personas puedan defenderse en el marco de procedimientos de desalojos	383
4. La regulación del trabajo penitenciario: los protocolos de actuación	315	8. Conclusiones	385
5. Cuando el Poder Judicial responde sin justicia	319		
5.1. La utilización de métodos penitenciarios para desarticular conflictos	322		
5.2. La versión penitenciaria de los hechos como guía de las investigaciones	324		

V. El dilema de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. Entre el reconocimiento de la norma escrita y la insuficiencia de prácticas transformadoras	389	5.1. Peritajes respetuosos en salud mental: pistas para transformar las prácticas	425
1. Introducción	389	6. El proceso de reforma del Código Civil de la nación: el riesgo de una propuesta regresiva en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad psicosocial	428
2. La Ley Nacional de Salud Mental, a dos años de su sanción	391	7. Epílogo. El reclamo de la sociedad civil y la mirada de las Naciones Unidas	434
2.1. El proceso de reglamentación: una asignatura pendiente y silenciada	391	Anexo. "Pueden encerrar mi cuerpo y mi mente... pero no mi corazón"	436
2.2. El Órgano de Revisión	391	1. Encierro y adentro... más encierro y adentro... más encierro	437
2.2.1. La necesidad de poner en marcha el Órgano de Revisión. El caso de MD	394	2. Vigilar y...	439
2.3. La preocupación del ámbito internacional en torno a la ausencia de reglamentación	396	3. ¿Sólo dos caras tiene la moneda?	440
3. Políticas públicas de salud mental sin suficientes vientos de cambio	397	VI. Debates actuales sobre la institucionalidad regional en derechos humanos. El futuro del Sistema Interamericano y las nuevas dinámicas de integración en América Latina	443
3.1. Menos recursos para la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental	399	1. Introducción	443
3.2. Algunas iniciativas con perspectiva de derechos humanos	400	2. Un poco de historia	444
3.3. Caso "AD": el despliegue estatal de la proviucia de Buenos Aires para des-cuidar niños	402	3. El nuevo proceso de "fortalecimiento" de la Comisión Interamericana	447
3.4. La situación de la ciudad de Buenos Aires: más acceso a la justicia, menos salud mental	404	3.1. El legado de Cochabamba	455
3.5. Caso "MM": las discusiones terapéuticas como velo del abandono	411	3.2. El SIDH y el presente de América Latina	462
4. La implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en el contexto carcelario federal	413	4. Nuevas experiencias de integración regional con impacto en derechos humanos. El caso del Mercosur y la Unasur	464
4.1. El programa PRISMA. La continuidad de las buenas intenciones	414	4.1. La integración subregional	465
4.2. El programa PROTIN. La salud mental marginal	417	4.2. El Mercosur: el lugar de los derechos humanos en el "Mercado Común del Sur"	466
4.2.1. Perfil de los profesionales, ámbito de pertenencia e intervenciones	418	4.3. La Unasur: la arquitectura institucional y el desafío de la no duplicación	478
4.2.2. Fundamentos epidemiológicos	419	4.4. Un caso testigo. Los mecanismos regionales y subregionales frente al golpe parlamentario en Paraguay	487
4.2.3. Perfil profesional de la Dirección Asociada y su carácter civil	420	4.4.1. La rápida reacción política de la Unasur y el Mercosur	488
4.2.4. Estimación de plazos para el alojamiento en el PROTIN	420	4.4.2. Reacciones ambiguas desde la OEA	490
4.2.5. Sobre las modalidades de egreso	420	4.4.3. Respuestas en materia de derechos humanos	492
4.3. Más prejuicio, menos derechos	421	5. Palabras finales	496
5. Las personas con discapacidad psicosocial en el sistema de justicia: un modelo para armar	422		

VII. Libertad de expresión y derecho a la información.			
Luces y sombras en el camino hacia el ejercicio pleno de una ciudadanía comunicacional			
1. Introducción	499		
2. Avatares en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual	499		
2.1. Crónica de una cautelar anunciada	500		
2.1.2. El fallo de la Corte que dio origen al emblemático 7D	500		
2.1.3. La maraña judicial: de subrogancias y otras recusaciones	502		
2.1.4. Una extensión de la cautelar y un fallo de primera instancia como cierre provisorio	506		
2.2. Otros fallos para Cablevisión	508		
2.3. Cambios en la AFSCA: de La Pampa a Morón con escalas	510		
3. La promoción de la diversidad en las pantallas	516		
3.1. Lo nacional, regional y local en la programación	516		
3.2. El diagnóstico de una pesada herencia	518		
3.3. Las nuevas oportunidades de la televisión digital	520		
3.4. Políticas para promover la producción audiovisual	520		
3.5. Más inversión en largometrajes y el reconocimiento como industria del audiovisual	522		
3.6. Un balance promisorio con desafíos pendientes	525		
4. La palabra pública frente a las sanciones civiles y penales	526		
4.1. Incitación a la censura	526		
4.2. Demandas millonarias	531		
5. El acceso a la información pública. Algunos avances, pero con ausencia de ley	533		
6. La regulación de la pauta oficial, otro desafío pendiente	535		
7. Palabras finales	537		
DEBATES			
			539
I. Paraguay, golpe de Estado y después			541
1. Introducción			541
2. Recurrencias de la historia			544
2.1. ¿Qué pasó en Curugaty?			551
3. El rol mediático			559
II. El derecho a la movilidad urbana en un contexto de pluriagencialidad metropolitana			569
1. Introducción			569
2. Sobre el derecho a la movilidad urbana. Apuntes necesarios			574
3. Una introducción a la problemática de la movilidad urbana en la Región Metropolitana			577
4. Sistema jurídico e institucional de la Región Metropolitana de Buenos Aires en relación con la regulación del transporte de pasajeros			579
5. La necesidad de conformar una autoridad única para el transporte público de la ciudad de Buenos Aires. ¿Novedad? ¿Alternativa?			583
6. Hacia la definición de una pluriagencialidad en los tres niveles de gestión administrativa			586
7. La necesaria articulación entre movilidad y usos del suelo			591
8. Conclusiones			594
Integran el CELS			597